

*El Poder Ejecutivo  
Nacional*

2  
158



BUENOS AIRES, 13 DIC 1983

VISTO el artículo 86, inciso 1º y 15 de la Constitución Nacional, y el artículo 179 del Código de Justicia Militar, y

CONSIDERANDO:

Que la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976, y los mandos orgánicos de las fuerzas armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.

Que entre los años 1976 y 1979, aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha, inspirados en la totalitaria "doctrina de la seguridad nacional".

Que todos los habitantes del país, y, especialmente, los cuadros subalternos de las fuerzas armadas, fueron expuestos a una intensa y prolongada / campaña de acción psicológica destinada a establecer la convicción de que los / "agentes disolventes o de la subversión", difusa categoría comprensiva tanto de los verdaderos terroristas como de los meros disidentes y aún de aquéllos que / se limitaban a criticar los métodos empleados, merecían estar colocados fuera de la sociedad y aún privados de su condición humana, y reducidos por tanto a objetos carentes de protección jurídica.

///...

*Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature at the bottom.*

*El Poder Ejecutivo  
Nacional*

...///2.-



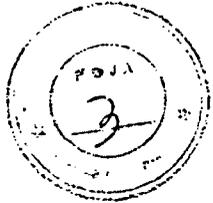
Que, por otra parte, y en el marco de esa acción psicológica, se organizó la represión sobre la base de procedimientos en los cuales, sin respeto por forma legal alguna, se privó de su libertad a personas que resultaron sospechosas a juicio de funcionarios no individualizados, y sobre la base de esa mera sospecha, no obstante haber sido encontradas en actitud no violenta, fueron conducidos a lugares secretos de detención, sin conocerse con certeza su paradero ulterior, a pesar de lo cual cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchos de ellos fueron privados de la vida sin forma alguna de juicio, y, además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos.

Que en numerosas manifestaciones individuales los integrantes de los mandos superiores de las fuerzas armadas y de la junta militar que usurpó el gobierno de la Nación en la fecha antes indicada, han reconocido la responsabilidad que les cupo en los procedimientos descriptos; esas manifestaciones se han visto corroboradas por la explícita declaración contenida en el Acta de la Junta Militar del 28 de abril del año en curso, donde se declara que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las fuerzas armadas, y por la Junta Militar.

Que la existencia de planes y de órdenes hace a los miembros de la Junta Militar actuante en el período indicado, y a los mandos de las fuerzas armadas con capacidad decisoria, responsables en calidad de autores mediatos por los hechos delictivos ocurridos en el marco de los planes trazados y supervisados por las instancias superiores (artículo 514 del Código de Justicia Militar) ; la responsabilidad de los subalternos, que el texto de

///...

*2013*  
*[Handwritten marks and signatures]*



## El Poder Ejecutivo Nacional

...///3.-

esa norma desplaza, se ve especialmente reducida por las circunstancias de /- hechos derivadas de la acción psicológica antes destacadas, que bien pudo haber l o s inducido, en muchos casos, a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema coercitivo a que estaban sometidos.

Que además de los atentados derivados del cumplimiento regular de las órdenes recibidas, es también un hecho de conocimiento público que en el curso de las operaciones desarrolladas por personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su / dignidad y libertad sexual y contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores.

Que en esos casos, como en cualesquiera otros en los cuales se haya incurrido en excesos por parte de los ejecutores de las órdenes de operaciones, o en que éstas fueran de atrocidad manifiesta, la responsabilidad de esos ejecutores no excluye la que corresponde a los responsables del plan operativo. La puesta en práctica de un plan operativo que, por sus propias características, genera la grave probabilidad de que se cometan excesos, la que se vio confirmada por los hechos, genera para los responsables de haber creado la situación de peligro, esto es, los que aprobaron y supervisaron el plan operativo, el deber de evitar que ese peligro se materialice en daño.

Que, por otra parte, se ha señalado también la existencia de casos en los cuales se ejerció con desviación de poder la facultad de detención emergente del artículo 23 de la Constitución Nacional, y consecuentemente se menos

///...

*Handwritten notes and signatures:*  
OBS  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

# El Poder Ejecutivo Nacional



...///4.-

cabó de modo ilegal la libertad personal.

Que la existencia de textos normativos, públicos o secretos, destinados a amparar procedimientos reñidos con principios éticos básicos, no puede brindar justificación a éstos, pues son insanablemente nulas las normas de facto cuya eventual validez precaria queda cancelada ab initio por la iniquidad de su contenido.

Que la restauración de la vida democrática debe atender, como una de sus primeras medidas, a la reafirmación de un valor ético fundamental: afianzar la justicia. Con este fin, corresponde procurar que sea promovida la acción penal contra los responsables de aprobar y supervisar operaciones cuya ejecución necesariamente había de resultar violatoria de bienes fundamentales de la persona humana tutelados por el derecho criminal.

Que con la actuación que se preconiza se apunta, simultáneamente, al objetivo de consolidar la paz interior.

Que esa persecución debe promoverse, por lo menos, en orden a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormento a detenidos; todo ello, sin perjuicio de los demás delitos que se pongan de manifiesto en el curso de la investigación, y en los que las personas a quienes se refiere este decreto hayan intervenido directamente, o como autores mediatos o instigadores.

Que para el enjuiciamiento de esos delitos es aconsejable adoptar el procedimiento de juicio sumario en tiempo de paz, concebido para aquellos casos en que sea necesaria la represión inmediata de un delito para mantener la moral,

///...

*Handwritten notes and signatures:*  
CMTZ  
A. M.  
Q. G.  
M. B.  
M. B.

# El Poder Ejecutivo Nacional

...///5.-

la disciplina y el espíritu militar de las fuerzas armadas (artículo 502 del Código de Justicia Militar). Esos valores se han visto afectados de modo absoluto con la adopción, por los mandos superiores orgánicos de esas fuerzas, de un procedimiento operativo reñido con los principios elementales del respeto por la persona humana.

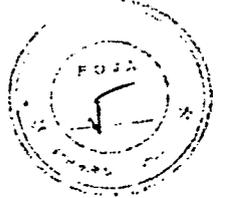
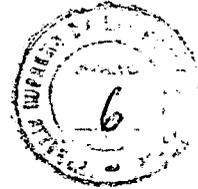
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122, inciso 1º del Código de Justicia Militar, corresponde intervenir en el juzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Que corresponde respetar la competencia de ese tribunal en atención a la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional de sacar al imputado del juez designado por ley con antelación al hecho; sin embargo dado que el ser juzgado penalmente en última instancia por un tribunal de índole administrativa constituye tanto un privilegio como una desprotección para el procesado, ambos vedados por la Constitución, se prevé enviar inmediatamente al Congreso un proyecto de ley agregando al procedimiento militar un recurso de apelación amplio ante la justicia civil.

Que la persecución penal de los hechos a que se refiere este decreto interesa a todos y cada uno de los habitantes, en particular a las víctimas, los que podrán - en uso de sus derechos - realizar aportes informativos dirigidos al esclarecimiento de esos delitos y al acopio probatorio contra sus autores.

Que con la finalidad de atender a estos requerimientos es necesario practicar los ajustes presupuestarios destinados a permitir que el Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cuente con el equipamiento de perso-

///...



*CRAS*

*[Handwritten signatures and initials]*



*El Poder Ejecutivo  
Nacional*

...///6.-

nal y elementos que hubiere menester.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Sométese a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos Juntas Militares subsiguientes, Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio E. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando R. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya.

ARTICULO 2°.- Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el artículo primero.

ARTICULO 3°.- La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Militar uan vez sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha.

ARTICULO 4°.- Practíquense los ajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento del presente decreto, y la dotación de equipamiento y personal transitorios que requiere el señor Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

///...

*RAAS*  
*[Handwritten signatures and initials]*

El Poder Ejecutivo  
Nacional



...1117.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DECRETO N° 158

*Luis L. de Posada*

*[Signature]*

DR. ANTONIO AMERICO TROCCHI  
MINISTRO DEL INTERIOR

*[Signature]*

D. RAUL ANTONIO BORRAS  
MINISTRO DE DEFENSA

*[Signature]*

DR. ALDO CARLOS NERI  
MINISTRO DE SALUD Y  
ACCION SOCIAL

DR. CARLOS R.S. ALCONADA ARAMBURU  
MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

*[Signature]*

LIC. DANTE MARIO CAPUTO  
MTRO. DE RR. EE Y CULTO

*[Signature]*

LIC. BERNARDO GRINSPUN  
MINISTRO DE ECONOMIA

ING. ROQUE G. CARRANZA  
MTRO. DE OB. Y SERV. PUBLICOS

*[Signature]*

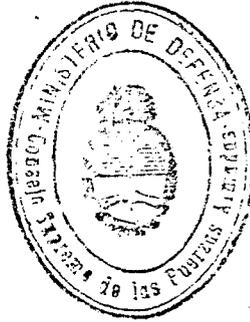
D. ANTONIO MUCCI  
MTRO. DE TRABAJO Y SEG.  
SOCIAL

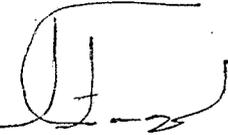
SECRETO

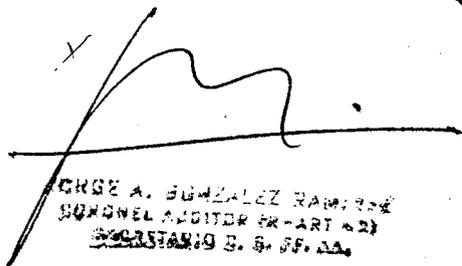


DILIGENCIA DE  
INICIACION DE  
ACTUACIONES

En la ciudad de BUENOS AIRES, a los veintiocho días del mes de diciembre del año mil novecientos ochenta y tres, visto el Decreto Nro 158/83 adjuntado por nota Nro 7985/83 Cde 28 del señor Ministro de Defensa, en la cual ordena "proceder a iniciar juicio sumario, en los términos del Artículo 502 del Código de Justicia Militar, a los integrantes de las Juntas Militares mencionadas en el Artículo 1º del citado decreto", procédase a iniciar las actuaciones.



  
LUIS MARÍA ROJAS  
CORONEL MAJOR (C)  
COMANDO EN JEFE

  
JORGE A. GONZÁLEZ RAMÍREZ  
CORONEL ADJUTOR EN JEFE  
SECRETARÍA G. S. FF. AA.

